REPÚBLICA DE COLOMBIA

GACETA DEL CONGRESO

SENADO Y CÁMARA

(Artículo 36, Ley 5ª de 1992)

IMPRENTA NACIONAL DE COLOMBIA
www.imprenta.gov.co

I S S N 0 1 2 3 - 9 0 6 6

AÑO XXXV - Nº 1579 | Bogotá, D. C., lunes, 19 de octubre de 2026 | EDICIÓN DE 16 PÁGINAS

DIRECTORES: DIEGO ALEJANDRO GONZÁLEZ GONZÁLEZ
SECRETARIO GENERAL DEL SENADO
www.secretariasenado.gov.co

MIGUEL ÁNGEL SÁNCHEZ VÁSQUEZ
SECRETARIO GENERAL DE LA CÁMARA
www.camara.gov.co

RAMA LEGISLATIVA DEL PODER PÚBLICO

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PONENCIAS

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 206 DE 2026 CÁMARA

por medio de la cual se promueve la competitividad de las zonas francas - Colombia Global.

Bogotá, D. C., 14 de octubre de 2026

Señor

ALFREDO APE CUELLO BAUTE

PRESIDENTE

COMISIÓN TERCERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE

CÁMARA DE REPRESENTANTES

Ciudad

Asunto: Informe de Ponencia para Primer Debate al Proyecto de Ley número 206 de 2026 Cámara, *por medio de la cual se promueve la competitividad de las zonas francas -Colombia Global.*

Respetado Presidente:

De conformidad con lo establecido en los artículos 150, 153 y 156 de la Ley 5ª de 1992 y en atención a la honrosa designación efectuada por la Mesa Directiva de la Comisión Tercera de la Honorable Cámara de Representantes, nos permitimos rendir Informe de Ponencia para Primer Debate al Proyecto de Ley número 206 de 2026 Cámara, *por medio de la cual se promueve la competitividad de las zonas francas - Colombia Global.*

De las honorables Congresistas,

MARÍA CAMILA SALAS SALAS
Coordinadora Ponente

JUAN LORETO GÓMEZ SOTO
Ponente

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 206 DE 2026 CÁMARA

por medio de la cual se promueve la competitividad de las zonas francas - Colombia Global.

El informe de ponencia se estructura de la siguiente manera:

I. Antecedentes del proyecto de ley

II. Objeto del proyecto de ley

III. Contenido del proyecto de ley

IV. Marco Constitucional, legal y jurisprudencial del proyecto de ley

V. Consideraciones de los ponentes

VI. Impacto fiscal

VII. Conflicto de intereses

VIII. Pliego de modificaciones

IX. Proposición

X. Texto propuesto para primer debate

I. ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE LEY

El presente proyecto de ley fue radicado el 12 de agosto de 2026 en la Secretaría General de la Cámara de Representantes. El 30 de septiembre de 2026 la Mesa Directiva de la Comisión Tercera Constitucional Permanente mediante Oficio número C.T.C.P.3.3-324-26C designó como coordinadora ponente a la honorable Representante a la Cámara *María Camila Salas Salas* y como ponente al honorable Representante *Juan Loreto Gómez Soto.*

II. OBJETO DEL PROYECTO DE LEY

La presente ley tiene por objeto ordenar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la

formulación de la Política de Internacionalización del Régimen de Zonas Francas y eliminar la barrera aduanera que impide la venta de mercancías desde zona franca a Sociedades de Comercialización Internacional sin nacionalización previa, con el fin de promover la internacionalización de los usuarios del régimen franco.

III. CONTENIDO DEL PROYECTO DE LEY

El proyecto de ley está integrado por cuatro (4) artículos.

- El artículo 1° determina el objeto de la ley.
- El artículo 2° otorga al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo un plazo de doce meses para formular y adoptar la política, articulada con el CONPES 4085 de 2022. Ordena consultar a ProColombia, la DIAN y las gobernaciones con zonas francas; fija contenidos mínimos sobre planes de internacionalización, información pública, metas territoriales y tratamiento diferenciado para Mipymes; establece informes anuales y revisión cada cuatro años.
- El artículo 3° establece que la venta de mercancías de un usuario de zona franca a una Sociedad de Comercialización Internacional no constituye importación ni causa tributos aduaneros cuando la mercancía sea exportada dentro de los doce meses siguientes. Si la exportación no ocurre, la operación se trata como importación ordinaria y deben pagarse los tributos, intereses y sanciones correspondientes. La DIAN conserva todas sus facultades de control.
- El artículo 4° establece la vigencia de la ley y derogatorias.

IV. MARCO CONSTITUCIONAL, LEGAL Y JURISPRUDENCIAL DEL PROYECTO DE LEY

a). Constitución Política. Los artículos 150, numeral 19, literales b) y c), y 189, numeral 25, distribuyen entre el Congreso y el Gobierno las competencias para dictar normas generales y regular el comercio exterior y el régimen de aduanas. El artículo 154 dispone que los proyectos relativos a las materias señaladas en los numerales 3, 7, 9, 11 y 22 y en los literales a), b) y e) del numeral 19 del artículo 150 deben iniciar su trámite en la Cámara de Representantes, y reserva al Gobierno la iniciativa respecto de las leyes que decreten exenciones de impuestos, contribuciones o tasas nacionales.

b) Ley 1609 de 2013. Contiene las normas generales a las cuales debe sujetarse el Gobierno para modificar aranceles, tarifas y demás disposiciones del régimen de aduanas. El proyecto adopta una regla legal específica para una operación de exportación indirecta y conserva las competencias reglamentarias y de fiscalización de las autoridades aduaneras.

c) Ley 67 de 1979. Regula las Sociedades de Comercialización Internacional y los certificados al proveedor, y establece la obligación de exportar las mercancías adquiridas con ese propósito. Su artículo 5° prevé la recuperación de los beneficios y las consecuencias fiscales cuando la exportación no se realiza dentro del plazo aplicable. El artículo 3° del proyecto utiliza este mecanismo de control y no crea un régimen sancionatorio paralelo.

d) Ley 1004 de 2005 y Decreto número 2147 de 2016. Constituyen el marco general del régimen de zonas francas, orientado a la creación de empleo, la captación de nuevas inversiones de capital, el desarrollo de procesos industriales altamente productivos, competitivos y la promoción de economías de escala. El proyecto no modifica las competencias de declaratoria ni la aprobación de los planes maestros.

e) Estatuto Tributario, artículo 240-1. Establece la tarifa del impuesto sobre la renta aplicable a los usuarios industriales de zona franca y vincula el tratamiento diferencial con planes de internacionalización y anual de ventas. El proyecto no modifica las tarifas generales ni los requisitos tributarios previstos en esta disposición.

f) Decreto número 1165 de 2019, artículo 65, parágrafo 2°. Dispone que las ventas de mercancías de un proveedor ubicado en zona franca a una Sociedad de Comercialización Internacional se consideran importación al territorio aduanero nacional y excluye la expedición del certificado al proveedor. Esta es la disposición que el artículo 3° modifica en lo pertinente.

g) CONPES 4085 de 2022. La Política de Internacionalización para el Desarrollo Productivo Regional promueve la inserción de los territorios en los mercados internacionales y la articulación entre productividad, inversión y comercio exterior. La política prevista en el proyecto debe armonizarse con este documento para evitar duplicidades y convertir sus lineamientos generales en metas específicas para el régimen franco.

h) Ley 819 de 2003, artículo 7°. Exige que todo proyecto que ordene gasto o conceda beneficios tributarios haga explícito su impacto fiscal y su compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. Esta obligación se desarrolla en el Capítulo 9 de la presente exposición de motivos.

i) Constitución Política, artículo 182, y Ley 5ª de 1992, artículos 286 y siguientes. Regulan los conflictos de interés de los congresistas y el deber de declararse impedidos cuando exista un beneficio particular, actual y directo. Su aplicación al presente proyecto se examina en el Capítulo 8.

V. CONSIDERACIONES DE LOS PONENTES

Las zonas francas dejaron de ser únicamente espacios de almacenamiento o tránsito aduanero. En Colombia funcionan como plataformas de producción industrial, prestación de servicios, logística, salud, agroindustria, actividades portuarias y comercio exterior. Por esta razón, su importancia no puede medirse solo por el número de áreas declaradas: debe evaluarse por el valor agregado

que generan, la inversión que movilizan, los empleos que sostienen, las compras que realizan a proveedores nacionales y su capacidad para insertar a las regiones en mercados internacionales.

De acuerdo con el balance oficial publicado por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo el 8 de julio de 2026, el país cuenta con 112 zonas francas declaradas y en operación. Estas han atraído inversiones acumuladas superiores a 57 billones de pesos, generan 198.415 empleos entre directos, indirectos y vinculados, registran exportaciones por más de 3.127 millones de dólares y contribuyen con el 2,1% del Producto Interno Bruto nacional. La cifra de participación en el PIB muestra que el régimen franco no es un instrumento marginal: una fracción apreciable del valor agregado producido en Colombia está asociada a empresas que operan bajo este esquema.

La escala de la inversión también permite dimensionar su capacidad de transformación productiva. Los más de 57 billones de pesos acumulados se materializan en plantas, infraestructura logística y portuaria, centros de servicios, tecnología, maquinaria y capital de trabajo. Estos activos amplían la capacidad productiva del país y crean demanda para actividades complementarias como construcción, transporte, mantenimiento, vigilancia, servicios empresariales, energía, telecomunicaciones y provisión de insumos. El efecto económico de una zona franca, por tanto, trasciende su perímetro físico y se proyecta sobre cadenas de proveedores ubicadas en el territorio aduanero nacional.

El aporte del 2,1% al PIB debe entenderse como una medición de valor agregado y no simplemente como el valor de las mercancías que ingresan o salen de las zonas francas. El PIB recoge la remuneración al trabajo, los excedentes empresariales y la producción neta generada dentro de la economía. En consecuencia, la participación reportada refleja que estas plataformas contribuyen de manera efectiva a la producción nacional mediante procesos industriales y de servicios, y no solo mediante operaciones aduaneras.

Este aporte se produce por varios canales. Primero, la inversión incrementa el acervo de capital y la capacidad de producción. Segundo, las empresas usuarias demandan bienes y servicios de proveedores nacionales, lo que genera encadenamientos hacia atrás. Tercero, la transformación de materias primas y la prestación de servicios especializados elevan el valor agregado de la oferta colombiana. Cuarto, la exportación permite ampliar la demanda más allá del mercado interno, generar divisas y aprovechar economías de escala. Finalmente, la concentración de empresas, infraestructura y servicios en un mismo entorno facilita la transferencia de conocimiento, la adopción tecnológica y la especialización laboral.

La información del DANE confirma que las zonas francas mantienen una actividad exportadora relevante y sujeta a variaciones del comercio internacional. En mayo de 2026, las exportaciones de mercancías desde las zonas francas colombianas aumentaron 14,7% frente al mismo mes de 2025, al pasar de 228,5 millones a 262,0 millones de dólares FOB. Este comportamiento evidencia el potencial del régimen, pero también la necesidad de una política estable que convierta los aumentos coyunturales en una trayectoria sostenida de internacionalización y diversificación exportadora.

La internacionalización es especialmente importante porque mejora la calidad del aporte al PIB. Cuando una empresa accede de manera permanente a mercados externos, puede producir a mayor escala, incorporar estándares internacionales, innovar y distribuir sus costos fijos sobre un volumen más amplio de ventas. Esos efectos se traducen en mayor productividad y fortalecen la capacidad de las empresas para pagar salarios, contratar proveedores, reinvertir utilidades y aportar ingresos tributarios. La política ordenada por este proyecto busca que esos resultados sean medibles por sector, territorio y tamaño empresarial.

La generación de 198.415 puestos de trabajo constituye uno de los principales efectos sociales del régimen. La cifra oficial agrega tres categorías que conviene distinguir. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo define el empleo directo y formal como la vinculación permanente y de tiempo completo mediante contrato laboral celebrado conforme a la ley, pagado por la empresa usuaria. El empleo indirecto corresponde al generado por la actividad económica de la empresa, pero prestado por trabajadores contratados por terceros o para servicios ocasionales. El empleo vinculado se reporta, principalmente, en zonas francas permanentes especiales de naturaleza agroindustrial, de salud o portuaria.

Esta composición demuestra que la incidencia laboral no termina en la nómina de los usuarios. Cada operación productiva requiere transporte de carga y de personal, servicios portuarios y aduaneros, aseo, vigilancia, mantenimiento, alimentación, software, servicios financieros y jurídicos, empaque y suministro de materias primas. Así, el empleo directo activa una red adicional de ocupaciones en empresas proveedoras. En territorios con menores oportunidades laborales o alta informalidad, estos encadenamientos pueden ampliar la base empresarial, mejorar las capacidades de los trabajadores y estabilizar ingresos familiares.

La relación entre internacionalización y empleo es igualmente relevante. Exportar de forma sostenida exige continuidad productiva, cumplimiento de estándares, trazabilidad, logística y personal especializado. Cuando una barrera regulatoria encarece innecesariamente la exportación indirecta, no solo afecta una operación comercial: reduce el margen para producir, contratar y ampliar mercados. En sentido contrario, una regulación que facilite la conexión entre usuarios de zona franca y Sociedades de Comercialización Internacional puede abrir canales de exportación para empresas que no

cuentan con escala, experiencia o redes suficientes para llegar por sí solas al comprador extranjero.

El efecto puede ser particularmente valioso para las Mipymes. Estas empresas enfrentan costos fijos de internacionalización proporcionalmente mayores, como identificar clientes, adaptar productos, gestionar documentos, consolidar carga y cumplir requisitos logísticos - aduaneros. Las Sociedades de Comercialización Internacional permiten agregar oferta y especializar esas funciones. Por ello, eliminar la nacionalización previa de una mercancía que será efectivamente exportada reduce una fricción que afecta con mayor intensidad a los productores de menor tamaño y puede favorecer la creación y conservación de empleo en sus cadenas de valor.

El departamento de Bolívar ilustra el alcance territorial de este instrumento. La fortaleza portuaria, industrial y turística de Cartagena permite conectar la producción regional con los mercados internacionales y atraer actividades de logística y servicios. En 2023, la Zona Franca Parque Central de Cartagena reportó un crecimiento de 156% en sus exportaciones y se consolidó como la zona franca más exportadora del país. Una política de internacionalización con metas territoriales puede aprovechar estas ventajas y, al mismo tiempo, identificar los departamentos con menor presencia o menor aprovechamiento del régimen.

Los resultados acumulados no eliminan las brechas del régimen. La información sobre inversión, empleo, exportaciones y cumplimiento tributario se encuentra distribuida entre el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, la DIAN y el DANE, con metodologías y periodicidades diferentes. Esto dificulta conocer cuánto del empleo es directo y formal, qué sectores generan mayor valor agregado, cuáles zonas presentan mejores encadenamientos locales, qué porcentaje de sus usuarios exporta y qué territorios requieren asistencia para aprovechar el instrumento.

A esa fragmentación se suma una barrera aduanera que contradice el propósito exportador del régimen. Obligar a nacionalizar una mercancía vendida a una Sociedad de Comercialización Internacional, pese a que su destino final es el exterior, inmoviliza capital, incrementa costos administrativos y desestimula el uso de un canal diseñado precisamente para promover exportaciones. La barrera es especialmente gravosa para empresas con menor liquidez y puede limitar su capacidad de ampliar producción y empleo.

Por estas razones, el proyecto combina información, coordinación y facilitación. La Política de Internacionalización permitirá fijar metas, unificar indicadores y evaluar resultados en empleo, inversión y exportaciones. La modificación aduanera removerá un costo evitable, manteniendo la obligación de exportar dentro de los doce meses y las facultades de control de la DIAN. La finalidad no es ampliar de manera indiscriminada los beneficios del régimen, sino asegurar que un instrumento que ya aporta el 2,1% del PIB y sostiene cerca de doscientos mil empleos pueda traducir mejor su inversión acumulada en producción exportable, empleos formales y desarrollo regional.

Referentes internacionales

La Zona Libre de Colón, en Panamá, la segunda zona franca más grande del mundo, permite a las empresas importar, almacenar y reexportar mercancías sin aranceles de importación dentro de su recinto fiscal (La Voz Noticias, 2026). En 2025 movilizó reexportaciones FOB por 10.940 millones de dólares (Infobae, 2026), y Colombia fue uno de sus principales destinos de reexportación, con el 7,2% del total (La Estrella, 2026). El modelo demuestra que suprimir la nacionalización de mercancía en tránsito hacia la exportación no debilita el control aduanero, simplemente evita gravar una operación que nunca tiene como destino el mercado interno, que es el mismo principio que recoge el artículo 3° de este proyecto.

El antecedente técnico más cercano al mecanismo que propone el artículo 3° es el régimen mexicano de "operaciones virtuales" del Programa IMMEX (Industria Manufacturera, Maquiladora y de Servicios de Exportación). La legislación aduanera mexicana establece que la mercancía bajo importación temporal no puede transferirse dentro del territorio nacional, salvo entre empresas con Programa IMMEX autorizado; en ese caso, la operación se resuelve únicamente con documentación, pedimentos y facturas, sin necesidad de presentar físicamente la mercancía ante la aduana (Blog One Core, 2020; Rob Novelo, 2022).

Para el artículo 2° (Política de Internacionalización), el referente más útil es de naturaleza institucional. La Promotora del Comercio Exterior de Costa Rica (PROCOMER) integra en una sola entidad la promoción de exportaciones, la atracción de inversión extranjera y la administración del régimen de zona franca. Según su informe más reciente, por cada dólar que el Estado costarricense exonera a las empresas de zona franca, estas generan un aporte de 2,9 dólares a la economía, con una contribución equivalente al 15% del PIB en 2024 (Delfino.cr, 2025). Este proyecto no busca replicar la fusión institucional costarricense, que excede el alcance acotado de esta ley, pero sí recoge su principio de fondo, donde la articulación deliberada entre la promoción de exportaciones y la administración del régimen franco mejora los resultados medibles del régimen.

VI. IMPACTO FISCAL

En cumplimiento del artículo 7° de la Ley 819 de 2003, es necesario distinguir los efectos de cada medida y hacerlos compatibles con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. El artículo 2°, relativo a la Política de Internacionalización, no crea una entidad, un fondo, una planta de personal ni una apropiación presupuestal específica. Sus actividades de formulación, coordinación, publicación y seguimiento pueden ejecutarse dentro de las competencias y apropiaciones ordinarias del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y de las entidades llamadas a participar. Por ello, no se identifica una orden directa de gasto adicional, sin perjuicio de los ajustes administrativos que determine el Gobierno.

El artículo 3° sí puede producir un impacto fiscal, pues excluye la nacionalización y el pago previo de

arancel e IVA en una operación que la regulación vigente trata como importación. Aunque la mercancía tiene vocación exportadora y el régimen prevé la recuperación de tributos, intereses y sanciones si la exportación no se realiza dentro de doce meses, la medida puede representar un eventual menor recaudo bruto frente al tratamiento actual. La cuantificación depende del volumen histórico de estas operaciones, de la composición arancelaria de las mercancías, del IVA aplicable, de los mecanismos de devolución o descuento posteriormente utilizados y de la tasa efectiva de cumplimiento de la obligación de exportar; información que se encuentra principalmente en poder de la DIAN y del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En consecuencia, durante el trámite legislativo deberá solicitarse al Ministerio de Hacienda y Crédito Público y a la DIAN una estimación del costo fiscal, su efecto neto sobre el recaudo y su compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo. También deberá verificarse si el mayor volumen de exportaciones, inversión, empleo y actividad económica puede compensar parcialmente el menor recaudo directo, sin asumir anticipadamente que dicho efecto dinámico neutraliza el costo fiscal.

Por tratarse de una disposición que puede configurar una exención o tratamiento exceptivo respecto de tributos nacionales y de una materia vinculada al régimen aduanero, el artículo 3° requiere iniciativa o coadyuvancia expresa del Gobierno nacional durante el trámite, conforme a los artículos 150, 154 y 189 de la Constitución y a la jurisprudencia constitucional aplicable. La aprobación de la medida deberá condicionarse a la obtención de dicho aval y a la incorporación de la estimación fiscal correspondiente en la ponencia, con el fin de asegurar su constitucionalidad y sostenibilidad.

VII. CONFLICTOS DE INTERESES

De conformidad con el artículo 182 de la Constitución Política y los artículos 286 y siguientes de la Ley 5ª de 1992, modificados por la Ley 2003 de 2019, los congresistas deberán declararse impedidos cuando la discusión o votación del proyecto pueda producirles un beneficio particular, actual y directo, o cuando dicho beneficio recaiga en su cónyuge o compañero permanente, parientes dentro de los grados legales, socios de hecho o de derecho, o personas respecto de las cuales exista alguna de las causales previstas en la ley.

La presente iniciativa contiene reglas generales dirigidas al régimen nacional de zonas francas y a una categoría abierta e indeterminada de usuarios y Sociedades de Comercialización Internacional. Por tanto, su sola discusión no configura automáticamente un conflicto de interés. El eventual beneficio económico del proyecto tiene carácter general, sectorial y futuro, y depende del cumplimiento de condiciones objetivas, incluida la exportación efectiva de la mercancía.

No obstante, deberá analizarse cada situación concreta. Podría existir conflicto cuando un congresista, o una persona comprendida en los vínculos señalados por la ley, tenga una participación o interés económico particular, actual y directo en una empresa usuaria de zona franca, una Sociedad de Comercialización Internacional, un usuario operador u otro sujeto cuya situación individual resulte beneficiada de manera diferenciable por la iniciativa. En tales eventos deberá formularse y tramitarse el impedimento conforme a la Constitución, la Ley 5ª de 1992 y la jurisprudencia aplicable.

VIII. PLIEGO DE MODIFICACIONES

TEXTO RADICADO	TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE CÁMARA DE REPRESENTANTES	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Título: "POR MEDIO DE LA CUAL SE PROMUEVE LA COMPETITIVIDAD DE LAS ZONAS FRANCAS – COLOMBIA GLOBAL"	Título: "POR MEDIO DE LA CUAL SE PROMUEVE LA COMPETITIVIDAD DE LAS ZONAS FRANCAS – COLOMBIA GLOBAL"	Se mantiene igual.
Artículo 1°. *Objeto*. La presente ley tiene por objeto ordenar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la formulación de la Política de Internacionalización del Régimen de Zonas Francas y eliminar la barrera aduanera que impide la venta de mercancías desde zona franca a Sociedades de Comercialización Internacional sin nacionalización previa, con el fin de promover la internacionalización de los usuarios del régimen franco.	**Artículo 1°. *Objeto*.** La presente ley tiene por objeto ordenar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la formulación de la Política de Internacionalización del Régimen de Zonas Francas y eliminar la barrera aduanera que impide la venta de mercancías desde zona franca a Sociedades de Comercialización Internacional sin nacionalización previa, con el fin de promover la internacionalización de los usuarios del régimen franco.	Se mantiene igual.

TEXTO RADICADO	TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE CÁMARA DE REPRESENTANTES	JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN
Artículo 2°. Dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo formulará y adoptará la Política de Internacionalización del Régimen de Zonas Francas.	**Artículo 2°.** Dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo formulará y adoptará la Política de Internacionalización del Régimen de Zonas Francas.	Se mantiene igual.
Artículo 3°. Las ventas de mercancías realizadas por un usuario industrial o comercial de zona franca a una Sociedad de Comercialización Internacional debidamente autorizada, no constituirán importación al Territorio Aduanero Nacional, siempre que la mercancía sea efectivamente exportada por la Sociedad de Comercialización Internacional dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de expedición del certificado al proveedor correspondiente. **Parágrafo 1°.** Si la mercancía no es exportada dentro del plazo señalado en este artículo, la operación se entenderá como una importación ordinaria desde la fecha de la venta, y la Sociedad de Comercialización Internacional deberá pagar a favor del fisco nacional una suma igual al valor de los tributos aduaneros de los que se hubiera beneficiado, más el interés moratorio fiscal correspondiente, sin perjuicio de las sanciones aduaneras a que haya lugar. **Parágrafo 2°.** La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales conservará la totalidad de sus facultades de control, fiscalización y verificación sobre las operaciones de que trata este artículo, en los términos del Decreto número 1165 de 2019 y demás normas concordantes.	**Artículo 3°.** Las ventas de mercancías realizadas por un usuario industrial o comercial de zona franca a una Sociedad de Comercialización Internacional debidamente autorizada, no constituirán importación al Territorio Aduanero Nacional, siempre que la mercancía sea efectivamente exportada por la Sociedad de Comercialización Internacional dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de expedición del certificado al proveedor correspondiente. **Parágrafo 1°.** Si la mercancía no es exportada dentro del plazo señalado en este artículo, la operación se entenderá como una importación ordinaria desde la fecha de la venta, y la Sociedad de Comercialización Internacional deberá pagar a favor del fisco nacional una suma igual al valor de los tributos aduaneros de los que se hubiera beneficiado, más el interés moratorio fiscal correspondiente, sin perjuicio de las sanciones aduaneras a que haya lugar. **Parágrafo 2°.** La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales conservará la totalidad de sus facultades de control, fiscalización y verificación sobre las operaciones de que trata este artículo, en los términos del Decreto número 1165 de 2019 y demás normas concordantes.	Se mantiene igual.
Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su promulgación, deroga las disposiciones	**Artículo 4°.** La presente ley rige a partir de su promulgación, deroga las disposiciones	Se mantiene igual

IX. PROPOSICIÓN

Por lo anteriormente expuesto, respetuosamente proponemos a los miembros de la Comisión Tercera Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes **dar primer debate y votar positivamente** el Proyecto de Ley número 206 de 2026 Cámara, *por medio de la cual se promueve la competitividad de las zonas francas - Colombia Global.*

De los honorables Representantes,

MARÍA CAMILA SALAS SALAS
Coordinadora Ponente

JUAN LORETO GÓMEZ SOTO
Ponente

TEXTO PROPUESTO PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 206 DE 2026 CÁMARA

por medio de la cual se promueve la competitividad de las zonas francas - Colombia Global.

El Congreso de la República de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. ***Objeto.*** La presente ley tiene por objeto ordenar al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo la formulación de la Política de Internacionalización del Régimen de Zonas Francas y eliminar la barrera aduanera que impide la venta de mercancías desde zona franca a Sociedades de Comercialización Internacional sin nacionalización previa, con el fin de promover la internacionalización de los usuarios del régimen franco.

Artículo 2°. Dentro de los doce (12) meses siguientes a la entrada en vigencia de la presente ley, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo formulará y adoptará la Política de Internacionalización del Régimen de Zonas Francas.

Artículo 3°. Las ventas de mercancías realizadas por un usuario industrial o comercial de zona franca a una Sociedad de Comercialización Internacional debidamente autorizada, no constituirán importación al Territorio Aduanero Nacional, siempre que la mercancía sea efectivamente exportada por la Sociedad de Comercialización Internacional dentro de los doce (12) meses siguientes a la fecha de expedición del certificado al proveedor correspondiente.

Parágrafo 1°. Si la mercancía no es exportada dentro del plazo señalado en este artículo, la operación se entenderá como una importación ordinaria desde la fecha de la venta, y la Sociedad de Comercialización Internacional deberá pagar a favor del fisco nacional una suma igual al valor de los tributos aduaneros de los que se hubiera beneficiado, más el interés moratorio fiscal correspondiente, sin perjuicio de las sanciones aduaneras a que haya lugar.

Parágrafo 2°. La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales conservará la totalidad de sus facultades de control, fiscalización y verificación sobre las operaciones de que trata este artículo, en los términos del Decreto número 1165 de 2019 y demás normas concordantes.

Artículo 4°. La presente ley rige a partir de su promulgación, deroga las disposiciones.

MARÍA CAMILA SALAS SALAS
Coordinadora Ponente

JUAN LORETO GÓMEZ SOTO
Ponente

CÁMARA DE REPRESENTANTES - COMISIÓN TERCERA CONSTITUCIONAL PERMANENTE (ASUNTOS ECONÓMICOS)

Bogotá D.C., 15 de octubre de 2026. En la fecha se recibió en esta Secretaría el Informe de Ponencia ***positiva*** *para Primer Debate del Proyecto de Ley No.206 de 2026 Cámara: "****POR MEDIO DE LA CUAL SE PROMUEVE LA COMPETITIVIDAD DE LAS ZONAS FRANCAS – COLOMBIA GLOBAL****", suscrito por los Honorables Representantes a la Cámara* ***JUAN LORETO GÓMEZ SOTO*** *y* ***MARÍA CAMILA SALAS SALAS****, y se remite a la Secretaría General de la Corporación para su respectiva publicación en la Gaceta del Congreso, tal y como lo ordena el artículo 156 de la Ley 5ª de 1992.*

El Secretario General,

NÉSTOR EDUARDO IMBETT HERAZO

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 308 DE 2026 CÁMARA

por medio de la cual se dispone de la maquinaria pesada, amarilla o industrial decomisada por su utilización en actividades consideradas ilícitas y se dictan medidas para su destinación en proyectos de reconstrucción, infraestructura y desarrollo rural de los municipios afectados por el sismo en Colombia de quinta y sexta categoría y se dictan otras disposiciones.

Bogotá, D. C., octubre de 2026.

Honorable Representante

HERNANDO GONZÁLEZ

Presidente de la Comisión Sexta Constitucional de la Cámara de Representantes.

Doctora

SANDRA BIBIANA ARISTIZÁBAL SALEG

Secretaría de la Comisión Sexta Constitucional de la Cámara de Representantes.

Ciudad

Asunto: Informe de Ponencia para Primer Debate en Cámara al Proyecto de Ley número 308 de 2026 Cámara.

Atendiendo a lo dispuesto en los artículos 150, 153, y 156 de la Ley 5ª de 1992, y conforme a la designación hecha por la Mesa Directiva como ponente de esta iniciativa, me permito rendir Informe de Ponencia para Primer Debate al Proyecto de Ley número 308 de 2026 Cámara, *por medio de la cual se dispone de la maquinaria pesada, amarilla o industrial decomisada por su utilización en actividades consideradas ilícitas y se dictan medidas para su destinación en proyectos de reconstrucción, infraestructura y desarrollo rural de los municipios afectados por el sismo en Colombia de quinta y sexta categoría y se dictan otras disposiciones.*

De la honorable Representante,

Lucy Mireya Bravo Obando
Representante a la Cámara por Huila
Coordinadora ponente

Diver Ney Franco Tejada
Representante a la Cámara por Antioquia
Ponente

INFORME DE PONENCIA PARA SEGUNDO DEBATE AL PROYECTO DE LEY NÚMERO 308 DE 2026 CÁMARA

por medio de la cual se dispone de la maquinaria pesada, amarilla o industrial decomisada por su utilización en actividades consideradas ilícitas y se dictan medidas para su destinación en proyectos de reconstrucción, infraestructura y desarrollo rural de los municipios afectados por el sismo en Colombia de quinta y sexta categoría y se dictan otras disposiciones.

1. TRÁMITE DE LA INICIATIVA

En septiembre de 2026 el Senador *Miguel Ángel Barreto Castillo* radicó ante la Secretaría General de la Cámara de Representantes el Proyecto de Ley número 308 de 2026 Cámara, *por medio de la cual se dispone de la maquinaria pesada, amarilla o industrial decomisada por su utilización en actividades consideradas ilícitas y se dictan medidas para su destinación en proyectos de reconstrucción, infraestructura y desarrollo rural de los municipios afectados por el sismo en Colombia de quinta y sexta categoría y se dictan otras disposiciones.*

El día 30 de septiembre de 2026, la Mesa Directiva de la Comisión Sexta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes designó mediante el Oficio número C.S.C.P 3.6-576/2026 a Lucy Mireya Bravo Obando como coordinadora ponente y a Diver Ney Franco Tejada como ponente del proyecto de ley. En este sentido, se presenta a continuación el informe de ponencia positiva para primer debate del Proyecto de Ley número 308 de 2026 Cámara ante la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes.

2. JUSTIFICACIÓN DE LA INICIATIVA

La iniciativa parte de una premisa sencilla, pero de profunda importancia para el Estado Social de Derecho: **los bienes que han sido utilizados para producir daño a la sociedad no deben convertirse en activos improductivos cuando pueden ser destinados, con las debidas garantías jurídicas, a reparar y reconstruir los territorios afectados por una calamidad pública.**

La propuesta busca, por tanto, establecer mecanismos que permitan que la maquinaria pesada, amarilla o industrial que haya quedado legalmente a disposición del Estado como consecuencia de procesos de decomiso, comiso, extinción de dominio u otras figuras jurídicamente procedentes, pueda ser destinada prioritariamente a obras de reconstrucción, rehabilitación, mantenimiento de vías terciarias, mitigación del riesgo, adecuación de terrenos y desarrollo rural en los municipios de menor capacidad fiscal que hayan resultado afectados por el sismo.

El reciente sismo ha dejado a los municipios de quinta y sexta categoría en una situación de vulnerabilidad extrema. Estas entidades territoriales, que ya de por sí cuentan con presupuestos limitados y una capacidad técnica reducida, se enfrentan ahora al reto titánico de reconstruir viviendas, vías de acceso, puentes y centros comunitarios. Ante este escenario, la falta de maquinaria para remoción de escombros y reconstrucción de infraestructura es uno de los mayores obstáculos para la recuperación temprana.

Es un contrasentido que el Estado destruya maquinaria pesada en una región mientras, a escasos kilómetros, una alcaldía municipal carece de los medios básicos para rehabilitar un camino veredal necesario para la supervivencia de los campesinos afectados. Este proyecto propone convertir esa "maquinaria de la ilegalidad" en "maquinaria para la reconstrucción".

2.1. Desarrollo Rural y Equidad Territorial

Los municipios de quinta y sexta categoría son el corazón de la producción agrícola colombiana, pero suelen ser los más olvidados en términos de inversión vial. Al destinar los bienes incautados a estas zonas, el Estado no solo atiende una emergencia por sismo, sino que fortalece la competitividad rural a largo plazo, reduciendo costos de transporte y conectando a las zonas rurales con los mercados urbanos.

2.2. Fundamentos jurídicos y técnicos

Como principios esenciales del proyecto se encuentran:

- **Principio de Economía y Eficiencia:** El Estado debe gestionar los bienes incautados bajo criterios de eficiencia. Si un bien es técnicamente recuperable y su administración es viable, su aprovechamiento social prevalece sobre su destrucción.
- **Gestión del Riesgo y Emergencias:** La normativa vigente debe armonizarse con las necesidades de gestión del riesgo. Ante la declaratoria de zonas de desastre tras eventos sísmicos, el uso de estos equipos se justifica plenamente como una herramienta para salvaguardar la vida, proteger la salud pública y restablecer los servicios básicos.
- **Trazabilidad y Control:** Para disipar las preocupaciones sobre el posible reingreso de estas máquinas al circuito criminal, el proyecto exige la implementación de un sistema riguroso de trazabilidad, georreferenciación y control administrativo, bajo la custodia de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) o la entidad que haga sus veces, asegurando que la maquinaria sea utilizada estrictamente para los fines públicos autorizados.

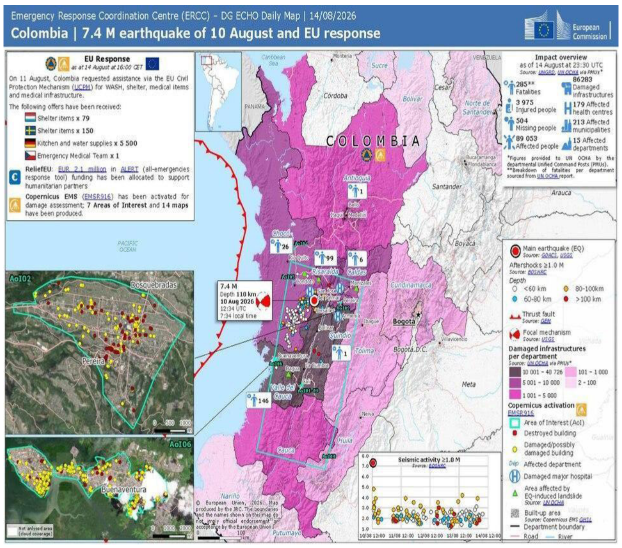
2.3. Las vías terciarias: el principal cuello de botella para la recuperación rural

La infraestructura de vías terciarias constituye uno de los principales argumentos que justifican esta iniciativa. Según información del Departamento Nacional de Planeación, Colombia cuenta con aproximadamente **142.284 kilómetros de red terciaria**. De estos, cerca de 100.748 kilómetros -71 %- son administrados por los municipios; 13.959 kilómetros corresponden a administraciones departamentales y 27.577 kilómetros están bajo responsabilidad del Gobierno nacional a través del Invías.

El mismo análisis señala que aproximadamente el 70% de las vías terciarias están en afirmado, 24% en tierra y solamente 6% se encuentran pavimentadas. Además, se estimó que únicamente el 19 % estaba en buen estado, 41% en estado regular y 40% en mal estado. DNP.

Estas cifras permiten dimensionar el problema estructural que enfrenta la población rural colombiana.

Mapa con la extensión de los daños del terremoto



Fuente: https://erccportal.jrc.ec.europa.eu/ECHO-Products/Maps#/maps/5754 / Autor: ERCC - Emergency Response Coordination Centre

Después de un terremoto, una inundación o un movimiento en masa, las primeras horas son decisivas. La ausencia de maquinaria disponible puede convertir un daño localizado en un problema de aislamiento territorial.

El DNP ha reconocido que las vías terciarias tienen efectos directos sobre la agricultura, la ganadería, la piscicultura, la educación rural, el turismo, la seguridad alimentaria, los costos de transporte y la reducción de la pobreza. DNP. Por tanto, la recuperación de estas vías no constituye únicamente una obra de infraestructura: **es una política de desarrollo económico y social.**

El ordenamiento jurídico colombiano ya reconoce la existencia de mecanismos para la administración y destinación de bienes provenientes de actividades ilícitas.

La Ley 1708 de 2014 –Código de Extinción de Dominio– establece un régimen de administración de bienes sometidos a procesos de extinción de dominio y asigna al FRISCO, administrado por la Sociedad de Activos Especiales (SAE), funciones relacionadas con su administración y destinación. La legislación contempla, además, mecanismos para la destinación de determinados activos a entidades públicas y programas de interés social.

Por otra parte, el Decreto número 2235 de 2012 estableció un régimen especial relacionado con maquinaria pesada utilizada en actividades de exploración o explotación minera sin los requisitos legales, contemplando medidas de destrucción y control. La norma comprende, entre otros equipos, dragas, retroexcavadoras y buldóceres.

El presente proyecto busca modificar la lógica de aprovechamiento de aquellos bienes que **jurídicamente puedan ser destinados al Estado**, de manera que, en los casos en que exista habilitación legal para su conservación y utilización, se privilegie su aprovechamiento social sobre su permanencia improductiva.

La finalidad no es desconocer las normas que ordenen la destrucción de determinada maquinaria cuando esta sea legalmente obligatoria, sino establecer un régimen para los bienes que, conforme al ordenamiento jurídico y a la situación procesal concreta, puedan ser conservados, administrados y destinados a una finalidad pública.

2.4. Objeto del Proyecto de ley

El proyecto está compuesto por 6 artículos, incluyendo la vigencia, y busca que se disponga y decomise la maquinaria pesada, amarilla o industrial decomisada por su utilización en actividades consideradas ilícitas para destinarla en proyectos de desarrollo de la reconstrucción, infraestructura y desarrollo rural de los municipios de municipios por el sismo en Colombia de quinta y sexta categoría, priorizando aquellos que hayan sido catalogados como PDET y Zonas Más Afectadas por el conflicto Armado (ZOMAC) o aquellos que se consideren en riesgo por desastres naturales.

En tal sentido, la maquinaria decomisada será puesta a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) o la entidad que haga sus veces, para su administración, custodia y reasignación, la cual la entregará en donación o reasignación la maquinaria decomisada a entidades territoriales de nivel municipal para proyectos de reconstrucción, desarrollo rural y obras de infraestructura; priorizando los municipios que hayan sido afectados por el sismo en Colombia, priorizando aquellos que hayan sido catalogados como PDET y Zonas Más Afectadas por el conflicto Armado (ZOMAC) o aquellos que se consideren en riesgo por desastres naturales.

Igualmente se dispone que las administraciones municipales en la designación de la maquinaria que le fue entregada por la SAE o la entidad que haga sus veces podrá gestionar recursos ante entidades de nivel nacional o internacional que garanticen el mantenimiento de dicha maquinaria y destinarán el uso de esta maquinaria pesada, amarilla o industrial en la reconstrucción, proyectos como construcción y mantenimiento de vías, proyectos productivos sostenibles, infraestructura social, atención de emergencias y desastres naturales, entre otros.

La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, ejercerán control fiscal y disciplinario en el proceso de entrega, uso y mantenimiento de la maquinaria decomisada, garantizando la transparencia y el cumplimiento de los fines sociales establecidos en la presente ley.

2.5. Antecedentes legislativos de la propuesta

La iniciativa se encuentra precedida por diferentes esfuerzos legislativos orientados a aprovechar maquinaria incautada o decomisada en beneficio de territorios con mayores necesidades.

En particular, durante las Legislaturas 2024-2025 y 2025-2026 fueron radicados proyectos de ley orientados a permitir que maquinaria amarilla y verde incautada pudiera ser transferida a municipios

PDET y ZOMAC para mejorar vías, mitigar riesgos y apoyar actividades agropecuarias.

También fue tramitado un proyecto relacionado con la destinación de maquinaria pesada decomisada en actividades de minería ilegal para obras PDET y ZOMAC en municipios de sexta categoría.

Asimismo, en el Senado se presentó un proyecto que propuso evitar la destrucción de maquinaria pesada incautada y orientar su aprovechamiento hacia la mecanización del campo colombiano, siempre que no existiera un riesgo comprobado para la seguridad o la salud pública.

Estos antecedentes demuestran que existe una discusión legislativa previa y consolidada alrededor de la necesidad de transformar los bienes provenientes de actividades ilícitas en instrumentos de inversión social y desarrollo territorial. La novedad del presente proyecto consiste en incorporar un criterio adicional de priorización: **la ocurrencia de una calamidad sísmica y la especial vulnerabilidad fiscal y administrativa de los municipios de quinta y sexta categoría.**

2.6. Justificación constitucional

La iniciativa encuentra fundamento en los principios y derechos consagrados en la Constitución Política.

Estado Social de Derecho

El artículo 1° de la Constitución establece que Colombia es un Estado Social de Derecho fundado, entre otros principios, en la solidaridad y la prevalencia del interés general.

La destinación social de bienes provenientes de actividades ilícitas para reconstruir comunidades afectadas por un desastre materializa dichos principios.

Fines esenciales del Estado

El artículo 2° constitucional establece como fines esenciales del Estado servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes constitucionales.

La recuperación de vías, escuelas, centros de salud, infraestructura comunitaria y sistemas productivos constituye una forma directa de cumplir dichos fines.

Igualdad material

El artículo 13 de la Constitución exige que el Estado adopte medidas en favor de grupos y personas que se encuentren en condiciones de debilidad manifiesta.

Los municipios pequeños afectados por un desastre de gran magnitud presentan una situación objetiva de vulnerabilidad institucional y fiscal que justifica una intervención diferenciada.

Función social y ecológica de la propiedad

El artículo 58 reconoce la función social de la propiedad.

La iniciativa pretende que los activos que hayan quedado legítimamente a disposición del Estado cumplan una finalidad social, especialmente en territorios afectados por una calamidad.

Protección del ambiente

La Constitución impone al Estado el deber de proteger el medio ambiente y prevenir los factores de deterioro ambiental.

La iniciativa debe contribuir a que la maquinaria que fue utilizada para causar daños ambientales pueda ser reorientada hacia actividades de recuperación y mitigación, siempre bajo parámetros ambientales y técnicos.

Autonomía territorial

Los municipios conservan su autonomía dentro de los límites constitucionales y legales. El proyecto no pretende sustituir a los alcaldes ni desconocer las competencias territoriales. Por el contrario, busca proporcionarles herramientas materiales para ejercer sus competencias.

Derecho a la infraestructura social y servicios esenciales

La Constitución impone al Estado deberes especiales respecto de la satisfacción de necesidades básicas, especialmente en materia de agua potable, salud, educación, saneamiento y desarrollo rural. La reconstrucción posterior a un desastre exige recuperar las condiciones materiales que hacen posibles estos derechos.

Justificación desde la gestión del riesgo de desastres

La Ley 1523 de 2012 establece la política nacional de gestión del riesgo de desastres y organiza el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres. La experiencia del terremoto de 2026 demuestra que la gestión del riesgo no puede limitarse a la atención inmediata de la emergencia.

En tal sentido, la maquinaria constituye un elemento transversal a todas estas fases. Una retroexcavadora puede remover material de un derrumbe; una motoniveladora puede recuperar la superficie de una vía; un cargador puede retirar escombros; un bulldócer puede apoyar la conformación de una banca; una excavadora puede intervenir cauces, drenajes y taludes.

En consecuencia, disponer de un parque de maquinaria para atención territorial representa una capacidad pública de respuesta.

La reconstrucción no puede limitarse a reparar edificios. En las zonas rurales, reconstruir significa recuperar la capacidad de producir, comercializar, estudiar, acceder a servicios de salud y movilizarse. Una vía terciaria rehabilitada permite: sacar productos agrícolas, ingresar fertilizantes y semillas, transportar alimentos; movilizar estudiantes, acceder a servicios de salud; facilitar el turismo rural; conectar productores con mercados; reducir costos logísticos; recuperar empleos; reactivar economías locales.

Por ello, la maquinaria no debe ser entendida únicamente como un elemento de obra pública, sino como una **herramienta de reactivación económica rural.**

2.7. Conclusión

La presente iniciativa no busca eliminar la facultad de las autoridades para perseguir el delito ambiental o económico, sino dotar al Estado de una herramienta inteligente y humana. Transformar maquinaria incautada en reconstrucción y esperanza para los municipios afectados por el sismo es un acto de justicia social. Al aprobar este proyecto, el Congreso

de la República enviará un mensaje contundente: los bienes que fueron utilizados para dañar el país deben ser, a partir de hoy, transformados en herramientas para construirlo.

3. IMPACTO FISCAL

La Ley 819 de 2003 en su artículo 7°, establece sobre el análisis de impacto fiscal de las normas:

"Artículo 7°. Análisis del impacto fiscal de las normas. En todo momento, el impacto fiscal de cualquier proyecto de ley, ordenanza o acuerdo, que ordene gasto o que otorgue beneficios tributarios, deberá hacerse explícito y deberá ser compatible con el Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Para estos propósitos, deberá incluirse expresamente en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite respectivas, los costos fiscales de la iniciativa la fuente e ingreso adicional generada para el financiamiento de dicho costo.

El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en cualquier tiempo durante el respectivo trámite en el Congreso de la República, deberá rendir su concepto frente a la consistencia de lo dispuesto en el inciso anterior. En ningún caso este concepto podrá ir en contravía del Marco Fiscal de Mediano Plazo.

Los proyectos de ley de iniciativa gubernamental, que planteen un gasto adicional o una reducción de ingresos, deberán contener la correspondiente fuente sustitutiva por disminución de gasto o aumentos de ingresos, lo cual deberá ser analizado y aprobado por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

En las entidades territoriales, el trámite previsto en el inciso anterior será surtido ante la respectiva Secretaría de Hacienda o quien haga sus veces". (SIC)

La Corte Constitucional ha afirmado en diversos fallos aspectos atinentes al impacto fiscal en el trámite legislativo:

"(...) es obligación del Congreso propiciar y desarrollar una deliberación específica y explícita sobre el impacto fiscal de la reforma propuesta que aborde al menos los siguientes aspectos:

(i) Que se hayan identificado los costos fiscales de la iniciativa;

(ii) Que se haya identificado su compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo;

(iii) Que se haya tenido en cuenta el concepto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, en caso de haberse presentado; y

(iv) Que se hayan señalado las posibles fuentes de financiación del proyecto"[1]*. (SIC).*

"El citado artículo 151 superior también dispone que por medio de leyes orgánicas se deben fijar las normas sobre preparación, aprobación y ejecución del presupuesto de rentas y ley de apropiaciones. En tal virtud, el 9 de julio de 2003 el Congreso de la República expidió la Ley 819, "[p]or la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones". El artículo 7° de dicha normatividad exigió que durante el trámite de proyectos de ley que ordenen gastos u otorguen beneficios tributarios se debe analizar su impacto fiscal y su compatibilidad con el Marco Fiscal de Mediano Plazo -supra núm. 67-. Con tal objeto, estableció las siguientes obligaciones: (i) la exposición de motivos y las ponencias deben incluir de manera expresa los costos fiscales de la iniciativa y la fuente de ingreso adicional generada para su financiación en la exposición de motivos y en las ponencias de trámite; (ii) el Ministerio de Hacienda y Crédito Público debe rendir un concepto sobre la consistencia del análisis de los costos fiscales y su conformidad con el Marco Fiscal de mediano Plazo, que deberá ser publicado en la ***Gaceta del Congreso****; (iii) el Gobierno nacional deberá incluir en los proyectos de ley de su iniciativa que comporten un gasto adicional o una reducción de ingresos, la correspondiente fuente sustitutiva, que deberá ser analizada y aprobada por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Dichas exigencias, en últimas, propenden porque la actividad legislativa se enmarque en las condiciones que garantizan la sostenibilidad fiscal del país"*[2]*. (SIC) (Énfasis adicionado)*

En línea con los preceptos normativos antes citados y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, se debe señalar que NO GENERA IMPACTO FISCAL, lo que permite concluir que la iniciativa cumple con los parámetros normativos y jurisprudenciales para proseguir su trámite.

4. CONFLICTO DE INTERESES

Según lo previsto en el artículo 291 de la Ley 2003 de 2019, *por el cual se modifica parcialmente la Ley 5ª de 1992 y se dictan otras disposiciones,* que señala:

"Artículo 291. Declaración de Impedimentos. El autor del proyecto y el ponente presentarán en el cuerpo de la exposición de motivos un acápite que describa las circunstancias o eventos que podrían, generar un conflicto de interés para la discusión y votación del proyecto, de acuerdo con el artículo 286. Estos serán criterios guías para que los otros Congresistas tomen una decisión en torno a si se encuentran en una causal de impedimento, no obstante, otras causales que el Congresista pueda encontrar" (SIC) (Énfasis adicionado).

De igual forma el artículo 286 de la Ley 5ª de 1992 establece:

"Artículo 286. Régimen de conflicto de interés de los congresistas. Todos los congresistas deberán declarar los conflictos de intereses que pudieran surgir en ejercicio de sus funciones.

Se entiende como conflicto de interés una situación donde la discusión o votación de un proyecto de ley o acto legislativo o artículo, pueda resultar en un beneficio particular, actual y directo a favor del congresista.

a) Beneficio particular: aquel que otorga un privilegio o genera ganancias o crea indemnizaciones económicas o elimina obligaciones a favor del congresista de las que no gozan el resto de los ciudadanos. Modifique normas que afecten investigaciones penales, disciplinarias, fiscales o

---

1 Corte Constitucional. Sentencia C-451 de 2020. M. P. Alejandro Linares Cantillo.

2 Corte Constitucional. Sentencia C-075 de 2022. M. P. Alejandro Linares Cantillo.

administrativas a las que se encuentre formalmente vinculado.

b) Beneficio actual: aquel que efectivamente se configura en las circunstancias presentes y existentes al momento en el que el congresista participa de la decisión.

c) Beneficio directo: aquel que se produzca de forma específica respecto del congresista, de su cónyuge, compañero o compañera permanente, o parientes dentro del segundo grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.

Para todos los efectos se entiende que no hay conflicto de interés en las siguientes circunstancias:

a) Cuando el congresista participe, discuta, vote un proyecto de Ley o de acto legislativo que otorgue beneficios o cargos de carácter general, es decir cuando el interés del congresista coincide o se fusione con los intereses de los electores.

b) Cuando el beneficio podría o no configurarse para el congresista en el futuro.

c) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo de carácter particular, que establezcan sanciones o disminuyan beneficios, en el cual el congresista tiene un interés particular, actual y directo. El voto negativo no constituirá conflicto de interés cuando mantiene la normatividad vigente.

d) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo de carácter particular, que regula un sector económico en el cual el congresista tiene un interés particular, actual y directo, siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual.

e) Cuando el congresista participe, discuta o vote artículos de proyectos de ley o acto legislativo que tratan sobre los sectores económicos de quienes fueron financiadores de su campaña siempre y cuando no genere beneficio particular, directo y actual para el congresista. El congresista deberá hacer saber por escrito que el artículo o proyecto beneficia a financiadores de su campaña. Dicha manifestación no requerirá discusión ni votación.

f) Cuando el congresista participa en la elección de otros servidores públicos mediante el voto secreto. Se exceptúan los casos en que se presenten inhabilidades referidas al parentesco con los candidatos.

Parágrafo 1°. Entiéndase por conflicto de interés moral aquel que presentan los congresistas cuando por razones de conciencia se quieran apartar de la discusión y votación del proyecto.

Parágrafo 2°. Cuando se trate de funciones judiciales, disciplinarias o fiscales de los congresistas, sobre conflicto de interés se aplicará la norma especial que rige ese tipo de investigación.

Parágrafo 3°. Igualmente se aplicará el régimen de conflicto de intereses para todos y cada uno de los actores que presenten, discutan o participen de cualquier iniciativa legislativa, conforme al artículo 140 de la Ley 5ª de 1992". (SIC) (Énfasis adicionado).

Como se evidencia de la lectura de la norma, el proyecto de ley que se presenta para el estudio del Congreso de la República no genera un conflicto de interés toda vez que se enmarca en los parámetros establecidos en el literal (a) de la inexistencia del conflicto de interés al tratarse de un proyecto de ley de interés general.

5. PLIEGO DE MODIFICACIONES

Texto radicado	Texto propuesto para primer debate ante la Comisión Sexta de la Cámara.	Justificación
Por medio de la cual se dispone de la maquinaria pesada, amarilla o industrial decomisada por su utilización en actividades consideradas ilícitas y se dictan medidas para su destinación en proyectos de reconstrucción, infraestructura y desarrollo rural de los municipios afectados por el sismo en Colombia de quinta y sexta categoría y se dictan otras disposiciones".	Sin modificaciones	
Artículo 1°. *Objeto*. La presente ley tiene por objeto disponer de la maquinaria pesada, amarilla o industrial decomisada por su utilización en actividades consideradas ilícitas para destinarla en proyectos de desarrollo de la reconstrucción, infraestructura y desarrollo rural de los municipios de municipios por el sismo en Colombia de quinta y sexta categoría, priorizando aquellos que hayan sido catalogados como PDET y Zonas Más Afectadas por el conflicto Armado (ZOMAC) o aquellos que se consideren en riesgo por desastres naturales.	**Artículo 1°. *Objeto*.** La presente ley tiene por objeto disponer de la maquinaria pesada, amarilla o industrial decomisada por su utilización en actividades consideradas ilícitas para destinarla en proyectos de desarrollo de la reconstrucción, infraestructura y desarrollo rural de los municipios **de quinta y sexta categoría afectados** ~~de municipios~~ por el sismo **ocurrido** en Colombia **el pasado 10 de agosto de 2026 y por el cual se expidió el Decreto 1261 de 2026** ~~de quinta y sexta categoría~~, priorizando aquellos que hayan sido catalogados como PDET y Zonas Más Afectadas por el conflicto Armado (ZOMAC) o aquellos que se consideren en riesgo por desastres naturales.	Se ajusta el objeto del artículo con el fin de concretar el supuesto de hecho sobre la ocurrencia del sismo del 10 de agosto de 2026.

Texto radicado	Texto propuesto para primer debate ante la Comisión Sexta de la Cámara.	Justificación
Artículo 2°. ***Administración de la maquinaria decomisada.*** La maquinaria decomisada será puesta a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) o la entidad que haga sus veces, para su administración, custodia y reasignación. **Parágrafo.** La Sociedad de Activos Especiales (SAE) o la entidad que haga sus veces deberá crear un banco de maquinaria amarilla con el fin de poner a disposición de los municipios de municipios de quinta y sexta categoría	Sin modificaciones	
Artículo 3°. ***Destinación*****.** La Sociedad de Activos Especiales (SAE) o quien haga sus veces, entregará en donación o reasignación la maquinaria decomisada a entidades territoriales de nivel municipal para proyectos de reconstrucción, desarrollo rural y obras de infraestructura; priorizando los municipios que hayan sido afectados por el sismo en Colombia, priorizando aquellos que hayan sido catalogados como PDET y Zonas Más Afectadas por el conflicto Armado (ZOMAC) o aquellos que se consideren en riesgo por desastres naturales. **Parágrafo 1°.** Las administraciones municipales en la designación de la maquinaria que le fue entregada por la SAE o la entidad que haga sus veces podrá gestionar recursos ante entidades de nivel nacional o internacional que garanticen el mantenimiento de dicha maquinaria. **Parágrafo 2°.** Las administraciones municipales destinarán el uso de esta maquinaria pesada, amarilla o industrial en la reconstrucción, proyectos como construcción y mantenimiento de vías, proyectos productivos sostenibles, infraestructura social, atención de emergencias y desastres naturales, entre otros.	**Artículo 3°.** ***Destinación*****.** La Sociedad de Activos Especiales (SAE) o quien haga sus veces, entregará en donación ~~o reasignación~~ la maquinaria **cuyo dominio se haya declarado extinto en el proceso definido por la Ley 1708 de 2014. o aquella que la reemplace, sustituya o modifique,** ~~decomisada~~ a entidades territoriales de nivel municipal para proyectos de reconstrucción, desarrollo rural y obras de infraestructura; priorizando los municipios que hayan sido afectados por el sismo en Colombia, priorizando aquellos que hayan sido catalogados como PDET y Zonas Más Afectadas por el conflicto Armado (ZOMAC) o aquellos que se consideren en riesgo por desastres naturales. **Para los mismos fines la SAE destinará provisionalmente la maquinaria a entidades territoriales de nivel municipal conforme a lo establecido en el artículo 96 de la Ley 1708 de 2014.** **Parágrafo 1°.** Las administraciones municipales en la designación de la maquinaria que le fue entregada por la SAE o la entidad que haga sus veces podrá gestionar recursos ante entidades de nivel nacional o internacional que garanticen el mantenimiento de dicha maquinaria. **Parágrafo 2°.** Las administraciones municipales destinarán el uso de esta maquinaria pesada, amarilla o industrial en la reconstrucción, proyectos como construcción y mantenimiento de vías, proyectos productivos sostenibles, infraestructura social, atención de emergencias y desastres naturales, entre otros.	Se ajusta la destinación de tal forma que el proyecto conserve los conceptos y definiciones de uso que la Ley 1708 de 2014 establece. De igual forma, se añade un inciso para conservar los fines de la destinación provisional que busca el proyecto, sin que ello implique la transferencia del bien hasta que haya sentencia sobre su definición legal.

Texto radicado	Texto propuesto para primer debate ante la Comisión Sexta de la Cámara.	Justificación
	Artículo 4°. ***Plan de uso, mantenimiento y rendición de cuentas***. Las entidades territoriales beneficiarias de maquinaria pesada, amarilla o industrial entregada en donación o reasignación deberán elaborar y adoptar, dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrega material del bien, un plan de uso, mantenimiento preventivo y correctivo, administración y destinación de la maquinaria. El plan deberá identificar, como mínimo: i) la maquinaria recibida y sus condiciones técnicas; ii) los proyectos, obras, actividades de atención de emergencias o intervenciones rurales a los cuales será destinada; iii) el cronograma estimado de utilización; iv) las fuentes de financiación previstas para su operación, mantenimiento, reparación, aseguramiento y, cuando corresponda, transporte; v) el servidor o dependencia responsable de su custodia y administración; y vi) los mecanismos de control para prevenir su uso indebido, pérdida, deterioro injustificado o destinación a fines diferentes de los previstos en la presente ley. Las entidades territoriales beneficiarias deberán publicar anualmente, en su sede electrónica o en un medio de divulgación accesible a la comunidad, un informe sobre la utilización de la maquinaria, las obras o actividades desarrolladas, el estado operativo de los equipos, los recursos invertidos en su mantenimiento y las medidas adoptadas para garantizar su adecuada conservación. **Parágrafo 1°.** La Sociedad de Activos Especiales (SAE), o la entidad que haga sus veces, podrá establecer lineamientos técnicos mínimos para la formulación, seguimiento y actualización de los planes de que trata el presente artículo, sin perjuicio de la autonomía de las entidades territoriales. **Parágrafo 2°.** La entrega de maquinaria estará condicionada a la acreditación de la capacidad mínima de la entidad territorial para asumir su custodia, operación, mantenimiento y destinación conforme a la ley. Cuando dicha capacidad sea insuficiente, la entidad territorial podrá presentar esquemas de asociación con otras entidades públicas territoriales, conforme a la normativa vigente.	Se adiciona un nuevo artículo con el fin de garantizar la capacidad de las entidades municipales y el correcto uso por parte de estas de la maquinaria amarilla, pesada o industrial.
Artículo 4°. ***Seguimiento y control.*** La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, ejercerán control fiscal y disciplinario en el proceso de entrega, uso y mantenimiento de la maquinaria decomisada, garantizando la transparencia y el cumplimiento de los fines sociales establecidos en la presente ley.	**Artículo 5°.** ***Seguimiento y control.*** La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, ejercerán control fiscal y disciplinario en el proceso de entrega, uso y mantenimiento de la maquinaria decomisada, garantizando la transparencia y el cumplimiento de los fines sociales establecidos en la presente ley.	Se ajusta la numeración del artículo.
Artículo 5°. ***Reglamentación*****.** El Gobierno nacional en cabeza de la entidad que este designe, reglamentará la presente ley en un plazo no mayor a seis (6) meses contados a partir de su promulgación.	**Artículo 6°.** ***Reglamentación*****.** El Gobierno nacional en cabeza de la entidad que este designe, reglamentará la presente ley en un plazo no mayor a seis (6) meses contados a partir de su promulgación.	Se ajusta la numeración del artículo.

Texto radicado	Texto propuesto para primer debate ante la Comisión Sexta de la Cámara.	Justificación
Artículo 6°. ***Vigencia y derogatorias.*** La presente rige a partir de su publicación en el ***Diario Oficial*** y deroga las disposiciones que le sean contrarias.	**Artículo 7°.** ***Vigencia y derogatorias.*** La presente rige a partir de su publicación en el ***Diario Oficial*** y deroga las disposiciones que le sean contrarias.	Se ajusta la numeración del artículo.

6. PROPOSICIÓN

Por las anteriores consideraciones y haciendo uso de las facultades conferidas por el artículo 153 de la Ley 5ª de 1992, me permito rendir Ponencia Positiva y solicitar a la Comisión Sexta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes, dar el primer debate al Proyecto de Ley número 308 de 2026 Cámara, ***por medio de la cual se dispone de la maquinaria pesada, amarilla o industrial decomisada por su utilización en actividades consideradas ilícitas y se dictan medidas para su destinación en proyectos de reconstrucción, infraestructura y desarrollo rural de los municipios afectados por el sismo en Colombia de quinta y sexta categoría y se dictan otras disposiciones.***

Lucy Mireya Bravo Obando
Representante a la Cámara por Huila
Coordinadora ponente

Diver Ney Franco Tejada
Representante a la Cámara por Antioquia
Ponente

PROYECTO DE LEY NÚMERO 308 DE 2026 CÁMARA

por medio de la cual se dispone de la maquinaria pesada, amarilla o industrial decomisada por su utilización en actividades consideradas ilícitas y se dictan medidas para su destinación en proyectos de reconstrucción, infraestructura y desarrollo rural de los municipios afectados por el sismo en Colombia de quinta y sexta categoría y se dictan otras disposiciones.

El Congreso de Colombia

DECRETA:

Artículo 1°. ***Objeto.*** La presente ley tiene por objeto disponer de la maquinaria pesada, amarilla o industrial decomisada por su utilización en actividades consideradas ilícitas para destinarla en proyectos de desarrollo de la reconstrucción, infraestructura y desarrollo rural de los municipios de quinta y sexta categoría afectados por el sismo ocurrido en Colombia el pasado 10 de agosto de 2026 y por el cual se expidió el Decreto 1261 de 2026 priorizando aquellos que hayan sido catalogados como PDET y Zonas Más Afectadas por el conflicto Armado (ZOMAC) o aquellos que se consideren en riesgo por desastres naturales.

Artículo 2°. ***Administración de la maquinaria decomisada.*** La maquinaria decomisada será puesta a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) o la entidad que haga sus veces, para su administración, custodia y reasignación.

Parágrafo. La Sociedad de Activos Especiales (SAE) o la entidad que haga sus veces deberá crear un banco de maquinaria amarilla con el fin de poner a disposición de los municipios de municipios de quinta y sexta categoría.

Artículo 3°. ***Destinación.*** La Sociedad de Activos Especiales (SAE) o quien haga sus veces, entregará en donación la maquinaria cuyo dominio se haya declarado extinto en el proceso definido por la Ley 1708 de 2014. o aquella que la reemplace, sustituya o modifique, a entidades territoriales de nivel municipal para proyectos de reconstrucción, desarrollo rural y obras de infraestructura; priorizando los municipios que hayan sido afectados por el sismo en Colombia, priorizando aquellos que hayan sido catalogados como PDET y Zonas Más Afectadas por el conflicto Armado (ZOMAC) o aquellos que se consideren en riesgo por desastres naturales.

Para los mismos fines la SAE destinará provisionalmente la maquinaria a entidades territoriales de nivel municipal conforme a lo establecido en el artículo 96 de la Ley 1708 de 2014.

Parágrafo 1°. Las administraciones municipales en la designación de la maquinaria que le fue entregada por la SAE o la entidad que haga sus veces podrá gestionar recursos ante entidades de nivel nacional o internacional que garanticen el mantenimiento de dicha maquinaria.

Parágrafo 2°. Las administraciones municipales destinarán el uso de esta maquinaria pesada, amarilla o industrial en la reconstrucción, proyectos como construcción y mantenimiento de vías, proyectos productivos sostenibles, infraestructura social, atención de emergencias y desastres naturales, entre otros.

Artículo 4°. ***Plan de uso, mantenimiento y rendición de cuentas***. Las entidades territoriales beneficiarias de maquinaria pesada, amarilla o industrial entregada en donación o reasignación deberán elaborar y adoptar, dentro de los tres (3) meses siguientes a la entrega material del bien, un plan de uso, mantenimiento preventivo y correctivo, administración y destinación de la maquinaria.

El plan deberá identificar, como mínimo: i) la maquinaria recibida y sus condiciones técnicas; ii) los proyectos, obras, actividades de atención de emergencias o intervenciones rurales a los cuales será destinada; iii) el cronograma estimado de utilización; iv) las fuentes de financiación previstas para su operación, mantenimiento, reparación, aseguramiento y, cuando corresponda, transporte; v) el servidor o dependencia responsable de su custodia y administración; y vi) los mecanismos de control

para prevenir su uso indebido, pérdida, deterioro injustificado o destinación a fines diferentes de los previstos en la presente ley.

Las entidades territoriales beneficiarias deberán publicar anualmente, en su sede electrónica o en un medio de divulgación accesible a la comunidad, un informe sobre la utilización de la maquinaria, las obras o actividades desarrolladas, el estado operativo de los equipos, los recursos invertidos en su mantenimiento y las medidas adoptadas para garantizar su adecuada conservación.

Parágrafo 1°. La Sociedad de Activos Especiales (SAE), o la entidad que haga sus veces, podrá establecer lineamientos técnicos mínimos para la formulación, seguimiento y actualización de los planes de que trata el presente artículo, sin perjuicio de la autonomía de las entidades territoriales.

Parágrafo 2°. La entrega de maquinaria estará condicionada a la acreditación de la capacidad mínima de la entidad territorial para asumir su custodia, operación, mantenimiento y destinación conforme a la ley. Cuando dicha capacidad sea insuficiente, la entidad territorial podrá presentar esquemas de asociación con otras entidades públicas territoriales, conforme a la normativa vigente.

Artículo 5°. ***Seguimiento y control.*** La Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la Nación, ejercerán control fiscal y disciplinario en el proceso de entrega, uso y mantenimiento de la maquinaria decomisada, garantizando la transparencia y el cumplimiento de los fines sociales establecidos en la presente ley.

Artículo 6°. ***Reglamentación.*** El Gobierno nacional en cabeza de la entidad que este designe, reglamentará la presente ley en un plazo no mayor a seis (6) meses contados a partir de su promulgación.

Artículo 7°. ***Vigencia y derogatorias.*** La presente rige a partir de su publicación en el ***Diario Oficial*** y deroga las disposiciones que le sean contrarias.

Lucy Mireya Bravo Obando
Representante a la Cámara por Huila
Coordinadora ponente

Diver Ney Franco Tejada
Representante a la Cámara por Antioquia
Ponente

COMISIÓN SEXTA CONSTITUCIONAL PERMANENTE

SUSTANCIACIÓN

INFORME DE PONENCIA PARA PRIMER DEBATE

Bogotá D.C., 14 de octubre de 2026

En la fecha fue recibido el informe de ponencia para Primer Debate al **Proyecto de Ley No. 308 de 2026 Cámara "POR MEDIO DE LA CUAL SE DISPONE DE LA MAQUINARIA PESADA, AMARILLA O INDUSTRIAL DECOMISADA POR SU UTILIZACIÓN EN ACTIVIDADES CONSIDERADAS ILÍCITAS Y SE DICTAN MEDIDAS PARA SU DESTINACIÓN EN PROYECTOS DE RECONSTRUCCIÓN, INFRAESTRUCTURA Y DESARROLLO RURAL DE LOS MUNICIPIOS AFECTADOS POR EL SISMO EN COLOMBIA DE QUINTA Y SEXTA CATEGORÍA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES".**

Dicha ponencia fue firmada por los Honorables Representantes **LUCY MIREYA BRAVO OBANDO (Coordinadora Ponente) y DIVER NEY FRANCO TEJADA.**

Mediante Nota Interna No. C.S.C.P. 3.6 – 622 / 26 del 14 de octubre de 2026, se solicita la publicación en la Gaceta del Congreso de la República.

SANDRA BIBIANA ARISTIZÁBAL SALEG
Secretaria

CONTENIDO

Gaceta número 1579 - Lunes, 19 de octubre de 2026

CÁMARA DE REPRESENTANTES

PONENCIAS **Págs.**

Informe de ponencia para primer debate, pliego de modificaciones y texto propuesto al Proyecto de Ley número 206 de 2026 Cámara, por medio de la cual se promueve la competitividad de las zonas francas - Colombia Global. 1

Informe de ponencia para primer debate, pliego de modificaciones y texto propuesto al Proyecto de Ley número 308 de 2026 Cámara, por medio de la cual se dispone de la maquinaria pesada, amarilla o industrial decomisada por su utilización en actividades consideradas ilícitas y se dictan medidas para su destinación en proyectos de reconstrucción, infraestructura y desarrollo rural de los municipios afectados por el sismo en Colombia de quinta y sexta categoría y se dictan otras disposiciones. 7